

Todos, excepto AP, consideran intolerables las declaraciones de Soteras

# los grupos políticos temen una escalada en la presión militar

Carlos DAVILA,  
corresponsal político

Madrid — Momentos antes de que el Consejo de Ministros decidiera la destitución del teniente general Fernando Soteras Casamayor del mando de la Capitanía General de Valladolid, la impresión generalizada en los medios políticos españoles era que las declaraciones del capitán general de la VII Región Militar constituían la última ola de una cascada que ha anegado la tranquilidad política y militar. Todos los partidos estudiaban con especial interés las declaraciones de Soteras, que inciden en dos puntos: el golpe del 23-F estaba justificado y a sus autores hay que indultarlos cuanto antes.

LOS partidos políticos de la oposición y, principalmente, el Demócrata Popular, que preside Osear Aizaga, aseguraban que el Gobierno no tenía otro remedio que destituir al capitán general de Valladolid, porque, en otro caso, el poder civil quedaría seriamente mermado en su autoridad ante el nuevo desafío de un oficial general del Ejército.

Los democristianos se mostraban ayer enormemente pesimistas sobre el estado de crispación en los ambientes castrenses y sugerían que Soteras Casamayor había pronunciado, sencillamente, el último de una serie de «toques de atención», que ni siquiera se sabe si se pueden dar por terminados.

En cualquier caso, la oposición creía unánimemente que el alegato de Soteras ha sido una clara falta de disciplina y que, como tal, puede ser castigado. ¿Qué hará entonces la oposición? «La oposición —respondían— debe quedarse callada, porque en estos temas existe muy escaso margen de maniobra.» El ex vicepresidente Suárez que tiene una especial sensibilidad por el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad de-

Las declaraciones del teniente general Soteras Casamayor produjeron una «gravísima preocupación» en todos los ambientes políticos, donde se pensaba ya ayer —momentos antes de la resolución del Consejo de Ministros— que tales manifestaciones no tenían justificación alguna y deberían ser seriamente sancionadas por el Gobierno con el cese.

**PDP: «No tienen más remedio que destituir a Soteras»**

**CDS: «Intolerables declaraciones»**

**Minoría catalana: «Los militares deben acostumbrarse a ser ciudadanos normales»**

**PCE: «El capitán general de Valladolid debe cesar de inmediato»**

**AP: La callada por respuesta**

mocrática española, calificaba ayer, a Diario 16 de «intolerables» las declaraciones de Soteras y aseguraba: «Pero, ¿cómo se puede hacer profesión de monarquismo y de democracia desde posiciones en las que, precisamente, se está atacando la Monarquía constitucional y se defienden tesis antidemocráticas.»

Suárez coincidía con la minoría parlamentaria catalana en el Congreso de los Diputados en temerse una «escalada» del poder militar, si el Gobierno no pone coto a manifestaciones tan claramente desestabilizadoras.

Los democristianos, en este mismo sentido, manifestaban que ya en el mes de agosto otro capitán general, esta vez cesante, se había permitido manifestaciones de apoyo al golpismo sin que el ministro de Defensa y el Gobierno hubieran actuado punitivamente.

Otro de los aspectos que se entrevén, según los círculos políticos, en los argumentos del general Soteras, es la reivindicación de la

se quejaba ante su primer ministro de la falta de capacidad del Gabinete, y que recibió una respuesta similar a ésta: La próxima vez no nos vote: El ciudadano normal se comporta retirando la confianza en las urnas y los militares deben acostumbrarse a saber que son ciudadanos norma/es.»

Finalmente, y en cuanto al indulto de los golpistas, los partidos —salvo, claro está, Afianza Popular, que no ha tenido a bien pronunciarse— se muestran absolutamente en contra porque, piensan que el momento no es propicio para conceder la gracia del perdón a unos jefes militares que pusieron en serio peligro el orden constitucional.

El argumento, también usado, por Soteras, de que el golpe fue incurso, se cae por su base, según opinión extendida de todos los partidos demócratas, porque la actuación de Tejero en el Congreso pudo provocar una «masacre», una carnicería con la que repetidamente amenazó a diputados, periodistas e invitados, si no cumplían estrictamente sus órdenes.

El Partido Socialista esperaba ayer la rápida declaración del Gobierno sobre la crisis militar; pero uno de sus portavoces, —que dijo aplazar su pronunciamiento hasta que se produjera la decisión del Gabinete que preside Felipe González, afirmó textualmente a Diario 16: «Las frases que ha vertido el teniente general Soteras son las más graves que se han oído no sólo contra este Gobierno sino contra cualquier Gobierno democrático.» Por su parte y finalmente, el secretario general adjunto del PCE, Enrique Curiel, consideraba «inaceptables» las manifestaciones del general Soteras, pedía al Gobierno el inmediato cese en la Capitanía General de la VII Región Militar, e indicaba que «la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas debe ser respetada en su integridad».

«autonomía militar», un concepto extraconstitucional que los militares —o algunos muy caracterizados— pretenden acuñar cuando, por ejemplo, señalan su dependencia casi exclusiva de la Junta de Jefes de Estado Mayor, olvidando que ésta se encuentra directamente ligada al poder civil por medio del Ministerio de Defensa.

Pero, sin duda alguna, el punto que más ha preocupado entre todas las inquietantes manifestaciones del general Soteras es la justificación del «motivo» golpista, una justificación que ha construido sobre las mismas claves que utilizaron los propios involucristas.

Todos los partidos, excepto Alianza Popular que hasta ahora no se ha pronunciado, indicaban que el llamado «desgobierno» no puede ser base de actuaciones ilegales como la efectuada por Milans, Tejero y Armada. Molins, portavoz de los catalanes en la Comisión de Defensa del Congreso, decía: «Sólo puedo recordar la famosa anécdota del a/mirante inglés que